

Terrorismo, narcotráfico y frontera

Se necesita vivir en paz

Yovanny Bermúdez, s.j.*



FOTOS.STARMEDIA.COM

El Ejecutivo venezolano redobló las labores de vigilancia en la frontera con el Zulia después del asesinato de doce soldados colombianos el pasado mes de mayo

La paz está atacada en Colombia. Los atentados de las FARC o del neoparamilitarismo, así como las declaraciones de algún político enturbian la esperanza de un hipotético proceso de negociación con los grupos guerrilleros. Parece que los últimos ataques de las FARC en el país así como en la frontera colombo-venezolana se orientan a menoscabar la legitimidad del gobierno nacional a través de la polarización política, a lo que se suma las constantes declaraciones del anterior presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en contra de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno actual, al considerar que el terrorismo y el narcotráfico se están apoderando nuevamente del país.

Lo claro es que el borde limítrofe colombo-venezolano nuevamente se encuentra en observación. Con el asesinato, en mayo pasado, de doce soldados colombianos en la frontera con el Zulia, el Ejecutivo nacional venezolano redobló las labores de vigilancia en toda la zona. Así lo dejó saber el presidente Chávez: “hemos fortalecido el patrullaje aéreo porque nosotros ratificamos nuestra posición: no vamos a permitir incursiones de ninguna fuerza armada, sea cual sea su naturaleza en territorio venezolano”¹. La respuesta neogranadina ha sido enviar sendos componentes militares para resguardar su frontera. Sin embargo, el trabajo de la administración actual es titánico porque debe hacer frente a la “creciente degradación, paramilitarización y narcotización del conflicto”². Con este panorama, Santos ha pedido aplicar mano dura en las acciones militares con el fin de exterminar los episodios violentos de los grupos armados ilegales. En este ambiente nacional surge el recién aprobado marco para la paz, con el cual se abren nuevas posibilidades para terminar el conflicto armado interno que desde hace cinco décadas ha enlutado al país.

MARCO PARA LA PAZ

Es importante destacar que la Ley de Justicia y Paz, de 2005, ha sido considerada un fracaso para Colombia porque “no ha funcionado para

hacer justicia (sólo se han dictado siete sentencias) ni para producir paz (más de diez mil paramilitares siguen en actividad)³. Lo cierto es que el esfuerzo no dio resultados porque la Fiscalía se vio sobrepasada por las 4 mil versiones y 300 mil víctimas. No hubo reparación, motivo por el cual el país tuvo que pasar por el difícil laberinto legislativo que finalizó con la aprobación de la ley de restitución de tierras. Además, el presidente Santos tiene que cargar con la herencia de Uribe porque, con la supuesta desmovilización de los paramilitares, no se desarticularon sus modos operacionales. Según el Cinep, las Bacrim (grupos neoparamilitares) cometieron en 2011, 800 infracciones al Derecho Internacional Humanitario⁴. Y con las FARC, aunque existe la percepción de que están perdiendo fuerza por la muerte/asesinato de sus máximos dirigentes, no es cierto a tenor de las acciones violentas ocurridas en el país en los últimos meses.

Con el marco para la paz se pretende propiciar las condiciones políticas y jurídicas que lleven al país a la paz duradera, estable y al compromiso de no repetición a través del diálogo con los grupos armados y con ello lograr una salida negociada al conflicto. Ahora bien, lo que piden los colombianos es que este proceso no se convierta en una salida beneficiosa para los grupos ilegales. Aun sigue vivo el recuerdo del proceso de paz promovido, pero fracasado, durante la presidencia de Andrés Pastrana.

El presidente Santos sabe que la llave de la paz es esquivada y difícil de conseguir. El objetivo es la paz y así lo expuso, en la Base Militar Tolimaída, cuando activó tres brigadas y cuatro batallones militares que irán a custodiar la zona limítrofe de Colombia con Venezuela y Ecuador: "Ustedes van a ir a zonas donde todavía tenemos problemas porque hay presencia activa de la guerrilla". La salida militar, al parecer, se mantiene como la posible llave de la paz.

De las críticas que se han formulado a esta iniciativa gubernamental, la revista *Semana* las ejemplifica terceramente con algunas preguntas: "¿Castigar a todos los que hayan delinquido en el conflicto? ¿Perdonarlos a cambio de verdad y reparación a las víctimas? ¿Hasta dónde debe llegar el perdón y a quiénes concedérselo? ¿Incluir a militares involucrados en "falsos positivos"? Estos dilemas generan reacciones opuestas y apasionadas en una sociedad en la que no hay palabra más estigmatizada que la que simboliza la blanca ave que, en los años de Álvaro Uribe, casi se volvió sinónimo de subversión⁵. La otra crítica, que sale desde la sede legislativa, es que las negociaciones serán entabladas directamente por el presidente de la República: "es otorgarle facultades extraordinarias al presidente para apelar a la llamada justicia transicional creando fórmulas de tratamiento diferenciadas a la hora de entablar diálogos con los actores del conflicto"⁶.

Está claro que se deben superar los intereses de la derecha como de la izquierda que apuestan a su fracaso por falta de voluntad política, porque existe el temor de que empiecen a señalarse a altos dirigente políticos, a grupos económicos-corporativos, como a jefes de los grupos armados ilegales, de ser actores directos en la promoción y ejecución de actos violentos en todo el país. También se incluye a los militares quienes además han recibido muchas críticas porque podrían ampararse en el cargo para no responder al país por los casos de violación de DD.HH, y así persista el velo de impunidad enraizado en el país.

Para finalizar, surge una pregunta en tres partes: qué va a pasar con las víctimas. En Colombia, según el Acnur hay, entre 1997 y 2011, 3 millones 888 mil 309 desplazados internos además de ocupar el séptimo lugar en refugio con 396 mil colombianos en esa condición⁷ y 61 mil 604 desaparecidos según cifras de la Fiscalía General⁸. Segundo: qué pasará con los victimarios, porque existe el temor de que se mantengan impune sus delitos por *colaborar* con la justicia. Tercero: ¿se dirá la verdad en una sociedad donde se oculta la herida del conflicto? porque la verdad o se dice o no habrá paz. Salvador Mancuso, uno de los hombres más sanguinarios del paramilitarismo afirmó: "el derecho a la verdad de las víctimas está embolatado no sólo porque él y los demás exjefes paramilitares fueron extraditados, sino también porque muchos hechos jamás podrán esclarecerse. Los que los ejecutaron están muertos y los vivos los desconocen"⁹. Entonces, la acción más urgente en el país es divulgar la verdad y los colombianos sentirse parte de un acontecimiento doloroso: la guerra.

* Abogado. Estudiante de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana.

NOTAS

- 1 *El Espectador*, 22-05-2012, pág. 15.
- 2 Ob. Cit. García, Mauricio.
- 3 GALLÓN GIRALDO, Gustavo. "La reparación aparente de la ley 975". En: *El Espectador*, 17-05-2012.
- 4 Cf. GARCÍA, Mauricio. "Necesidades y riesgos de la paz". En: *Cien días*. Cinep. Nro. 75, mayo-julio, 2012.
- 5 Revista *Semana*, nro.1572. 2012, p. 33.
- 6 *El Espectador*, 17-05-2012.
- 7 *El Tiempo*, 18-06-2012.
- 8 *El Espectador*, 21-05-2012, pág. 16.
- 9 *El Espectador*. 12-05-2012, pág. 6.